

GRUPO DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE PQRS

Bogotá, D.C., 10 JUN. 2026

Señor (a)
Petionario (a) Anónimo (a)
(publicación en la página web de ANLA)

Asunto: Respuesta a preguntas formuladas durante la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas de la ANLA 2026 con radicado 20266200698372 del 29 de mayo de 2026.

Expediente: PQRS-40813-2026

Respetado (a) petionario (a):

Teniendo en cuenta que el pasado 29 de mayo la ANLA celebró su Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas de la ANLA 2026, y que su pregunta no alcanzó a ser resuelta durante este evento y en la que indicó:

“Tiene una pésima ejecución además de sus malas prácticas; la resolución última que saco para los CEPD ; De forma arbitraria tiene hoy el desarrollo de la maquinaria en jaque se ve su falta de experiencia y sus decisiones fundadas sin un estudio previo, llevamos casi un mes sin poder radicar - Gracias que ahora arbitrariamente está cobrando el trámite pero ni siquiera se preparó para este cobro y literal tiene en jaque la operatividad del trámite de licencias - En el tema de CEPD es mentiras tenemos como demostrar procesos que llevan meses aún años y no responden nada, el punto de atención de la entidad es nulo - en el tema de los CEPD tienen todas las medidas arbitrarias posibles, toman medidas sin sustentos jurídicos - llevamos casi un mes sin poder radicar, no tenían nada estructurado para este cobro lleva mas de dos semanas con esta plataforma cada y sin poder hacer los pagos para poder radicar - esto no tiene ningún planteamiento serio y desde el año pasado solo han sido problemas y mas problemas en la emisión de los certificados - no hay respuestas claras sobre esta información y ademas no tienen la gente capacitada y un lineamiento claro - obvio esta en tiempo por que llevamos mas de un mes sin poder radicar eso quiere decir que llevan un mes sin hacer nada”.

Esta Autoridad Nacional en el marco exclusivo de las funciones y competencias de acuerdo con lo previsto en la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015 y el Decreto 376 del 11 de marzo de 2020, se permite dar respuesta en los siguientes términos:

En relación con las medidas adoptadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para garantizar la continuidad, eficiencia y seguridad jurídica en el trámite del Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD), la entidad se permite precisar que las acciones implementadas responden a un proceso integral de fortalecimiento institucional que

combina ajustes normativos, operativos y tecnológicos, en el contexto de un crecimiento extraordinario de la demanda y de la necesidad de adecuar el trámite a estándares técnicos internacionales.

Desde la perspectiva de la seguridad jurídica, la ANLA estructuró la incorporación del cobro del trámite CEPD en estricto cumplimiento del marco constitucional y legal vigente. En efecto, el artículo 338 de la Constitución Política y el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, establecen el deber a cargo de las autoridades ambientales de recuperar los costos de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. En aplicación de este mandato, la entidad desarrolló un análisis técnico y jurídico que evidenció que la expedición del CEPD implica actividades especializadas de verificación, validación y análisis de información técnica relacionada con ensayos de emisiones, documentación del fabricante y cumplimiento de estándares internacionales, lo cual justifica su inclusión dentro del esquema tarifario mediante la Resolución 001153 del 20 de abril de 2026.

Este proceso no fue ajeno a la participación de los actores del sector. Previo a la implementación del esquema de cobro, la ANLA adelantó espacios de socialización y reuniones con importadores, comercializadores y demás actores interesados, en los cuales se expusieron las medidas propuestas, se recibieron comentarios y observaciones, y se mantuvo una disposición abierta para incorporar aportes que permitieran fortalecer el instrumento. Asimismo, la entidad ha garantizado de manera permanente la recepción de observaciones a través de sus canales institucionales, en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y participación consagrados en la Ley 1437 de 2011.

Paralelamente, con el fin de reforzar la seguridad jurídica del trámite, la entidad ha avanzado en la estructuración de un procedimiento claro, delimitando sus etapas, requisitos y reglas de decisión. En este sentido, se ha propuesto la definición expresa de fases como la radicación, el chequeo de integridad, la evaluación técnica y la decisión, así como la diferenciación entre errores formales y sustanciales, la regulación de la subsanación de información y la determinación de términos ciertos para la actuación administrativa, todo ello en armonía con los principios de debido proceso, transparencia, eficacia y celeridad previstos en la Ley 1437 de 2011, tal como se desarrolla en la memoria justificativa del ajuste normativo.

En relación con la continuidad del trámite, la ANLA adoptó medidas específicas para evitar su interrupción durante la fase de implementación del nuevo esquema de cobro y los ajustes tecnológicos asociados. En particular, la Resolución 001153 de 2026 estableció un régimen transitorio mediante el cual la liquidación y el cobro de los servicios asociados al CEPD podían realizarse de manera manual previa solicitud del interesado, mientras se adelantaba la parametrización de las estructuras tarifarias en la plataforma VITAL. Esta previsión normativa tuvo como finalidad garantizar que el trámite continuara operativo aun en escenarios de transición tecnológica.

De manera complementaria, la entidad desarrolló lineamientos operativos claros para los usuarios, como se evidencia en la guía de pago del trámite, en la cual se define que la autoliquidación debe generarse a través de VITAL, que el pago constituye un requisito previo a la radicación y que debe existir correspondencia entre la tipología seleccionada y la solicitud

presentada, estableciendo además mecanismos de validación del pago dependiendo del medio utilizado (inmediata en PSE o sujeta a verificación en pagos por ventanilla o transferencia). Estos lineamientos evidencian que el proceso fue estructurado con reglas claras desde el punto de vista operativo, garantizando control, trazabilidad y transparencia en la gestión del trámite.

En cuanto a la disponibilidad de la plataforma tecnológica y las contingencias reportadas, es importante señalar que el propio diseño procedimental del trámite reconoce este tipo de escenarios. En desarrollo de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), y conforme a la regulación procedimental propuesta para el CEPD, la indisponibilidad de los sistemas de información constituye una causal válida para la suspensión de términos administrativos, junto con otras situaciones como el caso fortuito, la fuerza mayor o el aumento inusitado de solicitudes. Esta previsión normativa busca proteger el debido proceso de los usuarios, evitando que las contingencias tecnológicas afecten injustificadamente el curso de las actuaciones administrativas, y garantizando la validez jurídica de las decisiones adoptadas.

Desde la perspectiva de la eficiencia del trámite y los tiempos de respuesta, resulta indispensable considerar el contexto operativo en el cual se han presentado las dificultades mencionadas. La información técnica demuestra que el trámite del CEPD experimentó un crecimiento exponencial en la demanda entre los años 2023 y 2025, pasando de un escenario de incremento sostenido a una situación de congestión crítica. En 2024 se registraron más de 2.300 solicitudes, lo que representó un aumento cercano al 90% frente al año anterior, mientras que para 2025, con corte a diciembre, se superaron las 4.700 solicitudes, con un incremento particularmente alto en el segundo semestre. Este crecimiento coincidió, además, con la entrada en vigor de nuevos límites de emisión para maquinaria fuera de carretera en agosto de 2024, lo que amplió significativamente el universo de solicitantes y aumentó la complejidad técnica de las evaluaciones.

Frente a este escenario, la ANLA no permaneció inactiva, sino que implementó un conjunto de medidas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta institucional. Entre estas se destacan el fortalecimiento del equipo técnico evaluador, la redistribución de cargas de trabajo, la implementación de un plan de contingencia, la modificación de procesos internos, el desarrollo de herramientas de automatización para el pre-chequeo de solicitudes y la optimización de los mecanismos de seguimiento y control. Asimismo, se habilitó la posibilidad de corregir errores no sustanciales mediante la reapertura del formulario en la plataforma por un tiempo determinado, lo cual evita reprocesos y contribuye a la agilización del trámite.

Estas medidas permitieron reducir los tiempos de evaluación en diferentes momentos del proceso y estabilizar su comportamiento a pesar del incremento sostenido en la demanda, evidenciando una gestión orientada a la mejora continua del servicio. Adicionalmente, la entidad identificó la necesidad de consolidar estos avances mediante ajustes estructurales al procedimiento, orientados a garantizar radicaciones completas desde el inicio, estandarizar verificaciones, automatizar etapas iniciales y fortalecer la gestión basada en indicadores, con el fin de asegurar trazabilidad, transparencia y decisiones oportunas.

Finalmente, en relación con la necesidad de contar con lineamientos claros y personal capacitado, la ANLA ha venido adelantando acciones orientadas a fortalecer tanto los instrumentos técnicos como la capacidad institucional. Esto incluye la elaboración de guías y documentos de apoyo para los usuarios, la estandarización de criterios técnicos de evaluación, el fortalecimiento de los equipos técnicos encargados del trámite y la mejora de los sistemas de información que permiten a los usuarios consultar el estado de sus solicitudes. Todo ello responde a la necesidad de adecuar la operación del trámite a un contexto de mayor demanda y complejidad técnica, manteniendo criterios uniformes y garantizando un servicio más eficiente y transparente.

En este sentido, las dificultades reportadas por algunos usuarios deben entenderse en el marco de un proceso de transición y ajuste institucional derivado de la implementación de nuevos instrumentos, el crecimiento acelerado del trámite y la necesidad de fortalecer su soporte normativo y operativo. No obstante, las medidas adoptadas por la ANLA evidencian un esfuerzo continuo por garantizar la continuidad del servicio, mejorar la eficiencia en la atención de solicitudes y consolidar la seguridad jurídica del trámite del CEPD, en cumplimiento de sus competencias legales y en aplicación de los principios que rigen la función administrativa.

Se continuará adelantando acciones orientadas a la optimización del trámite de los Certificados de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD), mediante la implementación y fortalecimiento de medidas de mejora operativa, técnica y procedimental que contribuyan a incrementar su eficiencia, oportunidad y trazabilidad.

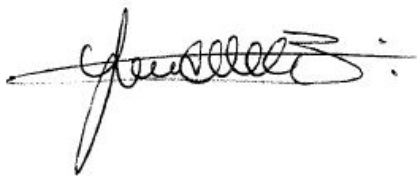
Asimismo, se mantendrán los espacios de diálogo, socialización e intercambio de información con los usuarios y actores de valor interesados, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y fortalecer de manera continua la prestación del servicio, en línea con las acciones que se han venido desarrollando durante la presente vigencia.

Ahora bien, es de señalar que las respuestas a preguntas formuladas durante este evento deben ser publicadas en nuestra página web, por lo cual le invitamos a consultar: tanto el micrositio donde se publican los Listado de Respuestas a Derechos de Petición - <https://www.anla.gov.co/notificaciones/respuestas-a-derechos-de-peticion>, como el micrositio de rendición de cuentas - https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas, donde toda la información relacionada con este evento será puesta a disposición de los interesados.

Cordialmente,

Radicación: 20262300595281

Fecha: 10 JUN. 2026



JUAN CARLOS MENDEZ BELTRAN
COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE PQRS

Elaboró:
JOSE ALFREDO SOLAQUE CHITIVA (CONTRATISTA)
JOLIE SOFIA GUARNIZO FRANCO (CONTRATISTA)

Revisó:
DAVID ORLANDO HERRERA RODRIGUEZ (CONTRATISTA)
LINA FERNANDA MATEUS GASPICH (COORDINADORA DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES DE EMISIONES POR PRUEBA DINAMICA)

Copia para:

Publicación en la página web de ANLA

Medio de Envío: Correo Electrónico

Archívese en: 202623001400000003E

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.